



MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, San Salvador, a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del día dieciséis de mayo del dos mil veintitrés.

El día ocho de mayo del presente año, se recibió vía correo electrónico, solicitud de información clasificada bajo referencia REF 26/2023-UAIP/MJSP, en la que se requiere la siguiente información:

1. *¿Cuántas mujeres condenadas a pena de prisión se encuentran a la orden de los siguientes Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena a la fecha del 30 de abril de 2023 de los siguientes juzgados:*
 - 1.1) *A la orden del Juzgado 1° de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador*
 - 1.2) *A la orden del Juzgado 2° de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador*
 - 1.3) *A la orden del Juzgado 3° de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador*
 - 1.4) *A la orden del Juzgado 4° de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador*
2. *¿Cuántas mujeres penadas se encuentran a la orden de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena fuera de la capital de San Salvador a la fecha del 30 de abril de 2023?*
3. *Total de mujeres que han cumplido o se encuentran cumpliendo pena de prisión en estado de embarazo, en el período comprendido entre 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 a la fecha del 30 de abril de 2023:*
4. *Total de mujeres que han cumplido o se encuentran cumpliendo pena de prisión junto con sus hijos menores de cinco años, en el período comprendido entre 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 a la fecha del 30 de abril de 2023*

FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA RESOLUCIÓN.

- I. Que, la Ley de Acceso a la Información Pública, en adelante LAIP, señala en su artículo 2 que, *“Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna”*; en ese sentido, como elemento principal para la configuración del Acto Administrativo, la solicitud de información debe de ser dirigida a los entes competentes, entendiéndose como las *Instituciones que generen, administren o tengan en su poder la información requerida.*

Al respecto, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, define la Competencia como *"un conjunto de funciones que son atribuidas por la Ley, a un órgano o a un funcionario, que además constituye la medida de las potestades que le corresponden a cada entidad. Es una investidura legal, que se considera como una de las manifestaciones del principio de legalidad. Este principio se configura, en el sentido que los funcionarios actuarán, solamente, de acuerdo a las potestades concedidas por la Ley y nunca fuera de dicho ámbito; lo que a la postre implica, que los administrados no serán afectados en su esfera jurídica, salvo por actos dictados por el ente facultado para ello y en estricto respeto a la Ley y al ordenamiento jurídico"*¹; en ese sentido la Ley de Procedimientos Administrativos, en su artículo 42 manifiesta que *.- "La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia (...)"*.

Que, verificado en el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo las atribuciones y funciones delegadas al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, se advierte que la información requerida por la solicitante se encuentra fuera de la competencia de esta Secretaría de Estado, lo requerido está directamente relacionado con las atribuciones y competencias de la **Dirección General de Centros Penales**; en virtud de ello, se le orienta al solicitante a que puede presentar su solicitud de información a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de dicha Institución, en aplicación a lo establecido en el artículo 102 Ley de Acceso a la Información Pública y 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos.

En cuanto a este tema, se aclara que esta situación no supone una denegatoria al usuario para que ejerza su Derecho a solicitar información, al contrario, es una *asistencia al solicitante* para que su petición sea requerida a las instancias productoras de la información requerida, conforme lo establece el artículo 68 de la LAIP, que literalmente dice:

Art. 68: "Los interesados tendrán derecho la asistencia para el acceso a la información y al auxilio en la elaboración de las solicitudes, si así lo pide.

Cuando una solicitud de información sea dirigida a un ente obligado distinto del competente, éste deberá informar al interesado la entidad a la que debe dirigirse.

Por tal motivo, vista la solicitud de información, la suscrita Oficial de Información con base artículo 18 de la Constitución de la República de El Salvador, y artículo 72 letra "a", de la LAIP,

RESUELVE:

1. **DEVUÉLVASE** a la usuario la presente solicitud de información, por no ser la entidad que corresponde.

¹ SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: 117-2017. Emitida a las ocho horas nueve minutos del día nueve de octubre de dos mil diecinueve.

2. **ORIÉNTESE** a la solicitante a que haga uso de su Derecho de Acceso a la Información, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Dirección General de Centros Penales, información disponible en el siguiente enlace <https://www.transparencia.gob.sv/institutions/dgcp> para lo cual deberá presentar su solicitud –si así lo estima pertinente-, atendiendo los requisitos de la LAIP.
3. **DECLARESE LA INCOMEPENTENCIA** de esta Secretaría de Estado para conocer la presente solicitud de información.
4. **NOTIFÍQUESE.**


Amalia Funes
Oficial de Información MJSP

